

Cuadernos del Sur

Año 18 - N° 34

Noviembre de 2002

NUEVAS DIRECCIONES

www.cuadernosdelsur.org.ar
info@cuadernosdelsur.org.ar

Tierra  fuego
del

América Latina: La resistencia que viene del sur

Ernesto Herrera



Cuando esta edición de *Cuadernos del Sur* llegue a las manos de las y los lectores, el resultado de las elecciones en Brasil ya se conocerá. Si como todo hace pensar, Lula y el PT salen victoriosos, la fase de inestabilidad política abierta en la región no hará más que profundizarse y el nerviosismo de los “mercados financieros” (del imperialismo y los capitales transnacionales, para hablar claro) ira en aumento. En todo caso, quedará por dilucidarse la pugna entre ese programa de “transición gradual” y de alianza con los empresarios que impulsa la mayoría de la dirección del PT (abandonando la idea de ruptura con el neoliberalismo”), por un lado, y las enormes fuerzas sociales que apoyan al partido nacido en el seno de la clase obrera, y que luchan por un cambio radical en las condiciones de vida de millones de brasileños, por el otro.

De todas maneras, ese posible gobierno petista, que sólo puede entenderse en el cuadro de una crisis so-

cioeconómica brutal y de sus aparatos políticos burgueses de dominación, se entrelaza con el proceso en Argentina que vino a acelerar la crisis de dirección política burguesa regional en un cuadro de debacle económica, resistencias, protestas y rebeliones sociales.

Un clima de insurrección y desobediencia popular se ha instalado en la región. Y aunque la intensidad de sus manifestaciones diste de ser uniforme, el escenario es de inestabilidad e ingobernabilidad. El carácter transitorio de este nuevo período de la lucha de clases es indiscutible, en la medida que la disputa por las relaciones de fuerza lejos está de arribar a un desenlace. Bajo tales condiciones, el imperialismo reorganiza su estrategia de recolonización, lanzando una ofensiva que pretende asegurar su domina-

ción combinando factores tanto políticos como económicos y militares.

Las fuerzas militantes de la izquierda anticapitalista actúan decididamente en este nuevo período de la lucha de clases. Comparten las reflexiones y las experiencias de combate de los movimientos sociales, las iniciativas de las organizaciones de la izquierda latinoamericana, tanto como los dilemas, impasses y desafíos a los cuales se confronta. De igual manera, esta izquierda anticapitalista interviene en la (re)construcción de un pensamiento crítico, democrático, liberador, socialista. En la refundación de un programa alternativo y un horizonte estratégico. Con la perspectiva de un reagrupamiento de la izquierda radical.

Reorganización de la dominación imperialista

El voto de condena en la ONU contra Cuba (apoyado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos) y la ruptura de las relaciones diplomáticas de Uruguay con la isla (y ahora la ofensiva anticubana del gobierno de Fox); el fallido golpe de Estado en Venezuela; la profundización de la guerra en Colombia; y la destrucción económica de Argentina para comprar el país a bajo precio, liquidar el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) e imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), marcan una nueva fase de la ofensiva del imperialismo norteamericano sobre el continente.

Con México y Centroamérica alineados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) y el Plan Puebla-Panamá, con el Caribe sometido al control absoluto de Washington, la batalla principal se libra ahora en América del Sur.

Esta ofensiva se ha reforzado tras los hechos del 11 de septiembre 2001 y la campaña internacional contra el *terrorismo*. Pero, principalmente, luego de la apertura de un proceso revolucionario en Argentina y la crisis en Venezuela.

La política norteamericana para la región latinoamericana reposa en tres pilares: el despliegue militar y la criminalización de la protesta y las resistencias sociales —bajo el argumento de la lucha contra el “terrorismo” o “narcoterrorismo”— una estrategia de recolonización económica vía una “liberalización comercial” completa que busca garantizar y expandir las inversiones de las empresas norteamericanas y el robo de los recursos naturales vía megaproyectos (Amazonia, Patagonia, Istmo Centroamericano); una redefinición del rol de instituciones continentales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR). Esta política de “seguridad hemisférica” pretende jugar el rol de blindaje ante la crisis de legitimidad de las clases dominantes locales, y actuar como factor de estabilización en un escenario de ingobernabilidad político-institucional, protes-

ta social y, en ciertos casos, de crisis del sistema de dominación.

En este contexto, las élites gobernantes se encuentran subordinadas y apenas esbozan una patética mueca de disgusto. Solo las contradicciones con Brasil y Venezuela (42% del PBI de América Latina) en torno al ALCA, los subsidios agrícolas, el acero, y el petróleo sacuden las relaciones de Estados Unidos con los gobiernos de la región. Dependientes del blindaje económico imperialista (mercados norteamericanos y europeos y condiciones de los organismos financieros internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID), y atadas a las reglas de la OMC, las élites burguesas locales se rinden o apenas manifiestan débiles reclamos por un *"comercio libre más justo"*.

En la reciente cumbre de Madrid, los gobiernos latinoamericanos volvieron a recibir una bofetada. Aunque fueron a buscar una *"sólida asociación estratégica birregional"* con la Unión Europea, sólo obtuvieron una negativa en razón de la *"falta de integración y estabilidad"*, mientras que se le exigían a Argentina medidas de ajuste más duras y un acuerdo con el FMI.

En las reuniones por el ALCA de Caracas y Panamá (mayo 2002), Estados Unidos insistió en forzar una convergencia en torno a sus intereses, al tiempo que aumentaba sus medidas proteccionistas sobre la agricultura. La insistencia imperialista se centró en la *"liberalización de los mercados"*

en cinco áreas fundamentales : bienes industriales, agricultura, servicios, compras gubernamentales e inversiones directas extranjeras. Sobre las compras gubernamentales, Estados Unidos pretende que se apliquen las reglas del ALCA, no solamente a nivel federal o nacional sino también a los gobiernos estatales, provinciales y municipales. Es decir, una *"gobernanza"* hacia abajo.

Las reglas que son buenas para la mundialización del capital serían impuestas hasta el nivel local, robando una vez más la soberanía de la población de definir sus propios caminos de desarrollo. Esta nueva condición apunta directamente al corazón de cualquier programa de democracia autogestionaria.

El aumento de las presiones imperialistas se hace en un momento donde países como Brasil y Argentina necesitan reducir el déficit de sus balanzas comerciales para cubrir el pago de los intereses de la deuda externa, reducir sus mega-deudas internas y a pocos meses de las elecciones brasileñas, agregando así otro condicionamiento al futuro gobierno.

La reorganización estratégica de Estados Unidos se inscribe en la doble perspectiva de realización de un proceso de librecambismo continental y de represión al movimiento popular. El despliegue militar está en marcha a fin de controlar —si es preciso, por la fuerza— la globalización mercantil y los desórdenes y rebeldías

sociales que engendra. El interés estratégico de la región andina hace de ella una de las prioridades de la política de seguridad de Estados Unidos.

El Plan Colombia (rebautizado como Iniciativa Regional Andina) ocupa un lugar central en el dispositivo contrainsurgente. Tercer país receptor de "ayuda militar" (luego de Israel y Egipto), cuarto socio comercial de Estados Unidos, y quinta economía latinoamericana, Colombia es el laboratorio de una intervención a gran escala.

Mientras que el ultraderechista Uribe, con vínculos paramilitares, trata de involucrar a un millón de civiles en la guerra, ya sea armados o como "sapos" (informantes), y declara el *Estado de Conmoción Interna*, Bush redobra la apuesta. Ya fueron votados los 68 millones de dólares adicionales para la lucha contra el "narcoterrorismo" y en el 2003 habrá 98 millones de dólares para crear un "ejército petrolero" de mercenarios para cuidar los oleoductos de la Occidental Petroleum. En el "patio trasero" y por razones de seguridad, Estados Unidos está decidido a no permitir un "Estado fracasado". Menos en una región rica en petróleo, carbón y minería.

En tales condiciones, el Plan Colombia no solo apunta contra la insurgencia armada (particularmente las FARC) y el conjunto del movimiento social, sino que actúa como mecanismo disuasivo contra las resistencias populares en América Latina

al tiempo que abre escenarios favorables para las empresas multinacionales norteamericanas. Y es evidente que el Plan Colombia no tiene límites de fronteras ni de competencias. Que la intervención norteamericana no se detendrá en ningún país ni se ajustará a ningún otro interés que al de Estados Unidos.

Como parte de este dispositivo militar, el gobierno de Panamá incrementa su presencia militar en la zona del Darién y ha utilizando una cláusula del acuerdo del Canal que prevé la posibilidad de que Washington envíe tropas. Se han instalado bases militares en Aruba-Curaçao, en Manta (Ecuador), Comolapa (Salvador) Tegucigalpa y Palmerola (Honduras) y Liberia (Costa Rica), y se han puesto en marcha el operativo Nuevos Horizontes (Perú). La ocupación de Vieques (Puerto Rico), el Plan Dignidad en Bolivia, la Operación Cabañas 2001 (Argentina) y el entrenamiento de militares en Concepción (Paraguay) conforman la lista de un esquema bélico regional que disfruta de un acceso exclusivo a la base de Alcántara en Brasil.

La preocupación norteamericana por la "inseguridad hemisférica" se expresa en el documento del estado mayor del ejército de Estados Unidos -Visión Conjunta 2020- publicado en junio del 2001. Reiterando allí la nefasta doctrina de la "seguridad nacional", los militares norteamericanos alertan sobre los focos de inestabili-

dad principales: el “*triángulo radical*” (Colombia, Ecuador, Venezuela), Perú, Panamá y Argentina. Lo mismo en el documento “Política de Estados Unidos con respecto a la Región Andina”, elaborado por el Departamento de Estado el 17 de mayo del 2001, donde se prevé una inyección de “*ayuda de seguridad en forma de Financiamiento Militar Extranjero, adiestramiento y Educación Militares en el Extranjero*”. Estados Unidos moviliza a la CIA, la DEA, el Pentágono, el servicio de Guardacostas y el Comando Sur para poner en práctica esa política de intervención.

La estrategia contrainsurgente continental se acompaña de operaciones multilaterales en la perspectiva de una fuerza de intervención latinoamericana—especie de brazo armado— “*antiterrorista*” de la propia OEA. En efecto, el aspecto institucional de esta reorganización también se desarrolla. Se revitaliza la OEA y se construye un paradigma de “*solidaridad democrática*” para los países del continente (Carta Democrática Interamericana, votada en Lima luego del 11 de septiembre 2001) articulando “*la defensa de los derechos humanos*” y una buena “*gobernanza regional*”. Mientras tanto, los aparatos represivos se modernizan, la impunidad del terrorismo de Estado se asegura, y la “*limpieza social*” de los sujetos “*desechables*” (como en Colombia, Guatemala, Chiapas, Argentina y Brasil) es parte del combate al “*delito organizado*”, al

“*contrabando*”, al “*narcotráfico*”, a la “*delincuencia*” de la “*economía ilícita*” de las “*clases peligrosas*”

Esta “*gobernanza*” interamericana pretende instaurar un derecho de injerencia, mandando al basurero los principios de no-intervención y el respeto de la soberanía nacional, muy vivos en países cuya historia entera está marcada por las luchas antiimperialistas y contra las intervenciones extranjeras.

Simultáneamente, la crisis de legitimidad y gobernabilidad de las élites burguesas impone mecanismos y leyes de control social y recortes en los derechos democráticos de la “*sociedad civil*”. El Estado “*democrático*” asume cada vez más un carácter policial, autoritario y de represión a todas las manifestaciones de protesta y desobediencia.

Justamente, la crisis del “*paradigma neoliberal*” como fase actual de la mundialización capitalista y el fracaso en “*modernizar el subdesarrollo*”, son factores claves de esa pérdida de legitimidad y cohesión del discurso dominante. Ya ni siquiera franjas muy amplias de la “*clases medias*” pueden ser seducidas con la promesa consumista. Por el contrario, pasan a la oposición militante a través de la movilización, el voto protesta o la abstención.

La crisis de legitimidad y gobernabilidad ha sido una constante de los últimos años en América Latina, lo que resalta la inestabilidad política en

la región. Esta crisis alcanza de lleno en la línea de flotación de la *"democracia representativa"*. La institucionalidad se ha visto quebrada por las luchas democráticas de masas, que derumbaron en los últimos tres años a presidentes electos, re-electos o impuestos por los parlamentos y congresos: Cubas Grau (Paraguay), Bucarán y Mahuad (Ecuador), Fujimori (Perú), De la Rúa y Rodríguez Saá (Argentina). Es esta otra singularidad de América Latina, donde el movimiento popular ha ejercido el principio de revocabilidad y de democracia directa, dejando a un lado la delegación de poderes.

Es en este cuadro que se pone en pie —en los planos económico, militar y político— una *"arquitectura multifuncional"* que debería permitir relegitimar la supremacía imperialista.

Los objetivos que figuran en la agenda de Wahington aparecen claros: aplastar el nuevo ascenso popular, la amplitud de la desobediencia civil y la radicalidad de las luchas sociales; revertir el proceso revolucionario abierto en Argentina; cooptar, neutralizar o directamente sabotear un posible gobierno de Lula en Brasil; derrotar a la insurgencia armada y asegurar el suministro del petróleo colombiano; desestabilizar al gobierno de Chávez —culpable de un discurso nacionalista y de alianza con La Habana; aplastar la resistencia zapatista en Chiapas y de las comunidades indígenas, campesinos, pobladores y sindicalistas que se oponen al saqueo

del Plan Puebla-Panamá; reforzar con el bloqueo criminal e infligir una derrota final a la revolución cubana; crear condiciones de *"estabilidad democrática"* que permitan el ingreso seguro de los capitales norteamericanos en la disputa por los mercados con la Unión Europea.

Una crisis socioeconómica aplastante

La crisis socioeconómica del *"modelo neoliberal"* tanto como la crisis de los proyectos de integración regional subordinada (MERCOSUR, CAN-Comunidad Andina de Naciones, Mercado Común Centroamericano) se aceleraron luego del crack financiero de 1997-1998 y de la ofensiva en dirección al ALCA. Aún si consideramos de que no esté dicha la última palabra en torno al ALCA: por un lado debido a las nuevas condiciones (proteccionistas) que el Congreso de Estados Unidos le ha puesto a Bush a través de la Ley de Autoridad de Promoción Comercial o vía rápida (*fast-track*); por otro debido al aumento de la movilización y la protesta social contra el ALCA.

Al mismo tiempo, la gravedad de la crisis no solamente demuestra los efectos destructivos del programa de contrarreformas liberales, sino las consecuencias brutales de un proyecto verdaderamente neocolonial impuesto a los países latinoamericanos. Ésta es una de las causas que explican la reorganización de la estrategia imperialista de dominación.

Este “nuevo pacto colonial” implica una transferencia gigantesca de los diversos tipos de recursos hacia los grandes grupos imperialistas (sociedades industriales-comerciales-financieras) y hacia una minoría de sus socios locales. Este proyecto incorpora una corrupción monstruosa y un parasitismo típico de una clase dominante que tiene más confianza en una cuenta bancaria abierta en Estados Unidos, Suiza o algún paraíso fiscal, que en su propio país. Una transferencia de riqueza tal que pasa por la destrucción de capas sociales enteras y de un grado sin precedentes de concentración de la riqueza, desastre social, crisis económico-financieras y recesiones cada vez más prolongadas.

El choque implica una destrucción industrial de los países que —como Argentina— tenían un desarrollo relativo. Los golpes de una mundialización del capital que obliga a los países “subdesarrollados” a contraer sus economías en la lógica del “ajuste estructural” y el pago de la deuda externa para satisfacer las exigencias de los países imperialistas y sus grupos transnacionales, ha destruido el potencial de la región. Casi todo ha sido privatizado y lo que resta está a la venta: reservas de agua y petróleo, electricidad, tierras, minas, puertos, servicios de salud.

Las causas estructurales de la crisis económica se ven acentuadas con el desequilibrio de las cuatro grandes

transformaciones registradas en la región:

1) El aumento del endeudamiento exterior a partir de los años 80; 709.000 millones de dólares (1999) mientras que entre 1982 y 1998, se pagaron 796.000 millones por el pago de intereses. El pago del servicio de la deuda compromete el futuro de las naciones ya que equivale al 39% del PIB y al 201% de las exportaciones;

2) La destrucción del tejido industrial en muchos países, con el retroceso de ramas industriales ligadas al desarrollo (estrategia de sustitución de importaciones) y con la implantación de sectores estrechamente ligados a la estrategia exportadora de las grandes firmas transnacionales;

3) El deterioro de los términos de intercambio, es decir, del valor respectivo de las exportaciones en relación a las importaciones (déficit de las balanzas comerciales);

4) Aumento de la pobreza y la desigualdad: 44% de la población latinoamericana es pobre, más de 90 millones de personas sobreviven con menos de dos dólares diarios, y el 10% que se apropia de más del 50% del ingreso nacional. Si para el cinismo del Foro Económico Mundial de Davos y New York, la pobreza es ante todo “falta de información”, los datos que muestra la región dan vuelta todas las falacias ideológicas de los dueños del dinero: en plena era de Internet, casi la mitad de la población latinoamericana no tiene acceso a una lí-

nea telefónica y el promedio de escolaridad apenas alcanza a 5,2 años.

La recesión global afecta directamente a la periferia latinoamericana: el crecimiento de las exportaciones bajó del 12% al 2% en el último año, la inversión externa se contrajo y el estancamiento del PBI en el 0.5% (2001) solo podría elevarse al 1.1% en el mejor de los casos.

La debacle se concentra actualmente en Argentina. La deuda externa supera una vez y media al PBI y equivale a más de cinco años de exportaciones, deuda que aumentó con las escandalosas privatizaciones. En los últimos dos años cerraron más de 3.000 empresas, el desempleo supera al 25% mientras que los pobres son 19 millones (de los cuales más de 8 millones son indigentes). Simultáneamente, los costos de la devaluación han sido pagados por los asalariados que perdieron, desde diciembre 2001, más del 40% de su poder adquisitivo.

Este gigantesco robo de recursos, de transferencia neta de riqueza, y de expropiación de ingresos, y de privatización del Estado, encuentra sin embargo, una respuesta colosal del movimiento popular. Y sintoniza con un nuevo período de las luchas de clases en América del Sur.

El relanzamiento de las luchas populares

Asistimos a un relanzamiento de las luchas populares de masas, de

reorganización de los movimientos sociales y de reconstitución de una conciencia de clase. Es decir, el peor momento de retroceso ha sido superado. Aunque todavía existan situaciones de fragmentación y confusión, este proceso de franca recuperación de los ámbitos de socialización de las diversas experiencias de lucha tiene un carácter amplio y radical, vinculando demandas y programas que incorporan contenidos económicos, sociales, políticos, democráticos, ecologistas, culturales y étnicos.

Este proceso no se detuvo por la intoxicación ideológica de los atentados en las Torres Gemelas y la campaña terrorista del imperialismo y los poderes mediáticos. Al contrario, la polarización social se acentuó luego del 11 de septiembre 2001. El *"argentinazo"* y la sublevación popular contra el golpismo en Venezuela, tanto como el aumento de las protestas, huelgas y caceroleos masivos en Uruguay y las luchas cada vez más amplias y radicales en Paraguay y Bolivia, confirman este nuevo período de lucha de clases.

Estas luchas de los movimientos sociales levantan programas y demandas que adquieren una visibilidad *"antineoliberal"*, pero se inscriben en una dinámica concreta de carácter antiimperialista y anticapitalista de la resistencia.

Movimientos y luchas como las protagonizadas por la Coordinadora

de Defensa del Agua y la Vida en Cochabamba, los cocacoleros del Chapare y las marchas campesinas en Bolivia, la CONAIE ecuatoriana y el MST de Brasil, los zapatistas en Chiapas, la movilización impulsada por el Consejo Democrático del Pueblo en Paraguay, los maestros, estudiantes y mapuches en Chile, los pobladores de Vieques, empleados públicos y movimientos populares en Colombia. Las innumerables movilizaciones sindicales (con coordinaciones como las de las centrales del Cono Sur), luchas campesinas (que han tenido en Vía Campesina un motor fundamental), de trabajadores desempleados (el ejemplo piquetero se ha extendido a varios países), del movimiento negro, mujeres, activistas por los derechos humanos y contra la impunidad, estudiantes y pobladores de los barrios, las radios comunitarias, vienen jugando el papel de articuladores de las distintas dimensiones de esta resistencia que contiene elementos —aún parciales— de contraofensiva.

Se destaca en este nuevo escenario el “*resurgimiento*” de los pueblos indígenas, sus organizaciones y sus demandas. Pueblos indígenas que se levantaron contra la conmemoración de los 500 años de la conquista de América.

También, la continuidad de la insurgencia armada en Colombia en el cuadro de una guerra sin tregua y con decenas de miles de víctimas.

Y, en muchos países, el relanza-

miento de un sindicalismo antiburocrático y de clase, opuesto a las estrategias conciliadoras de las direcciones, como es el caso de Argentina, Colombia, y Uruguay.

Este nuevo período de luchas y concientización democrática radical explica, entre otras cosas, la victoria (provisoria) de las masas más pobres contra los golpistas en Venezuela. Provisoria en la medida de que el nacionalismo-populista de Chávez no asegura el aplastamiento de la conspiración contrarrevolucionaria, ni la autonomía de los Círculos Bolivarianos, ni la autoorganización de las fuerzas radicalmente antiimperialistas que emergen al interior de la “*revolución bolivariana*”.

Todas estas luchas —que no se limitan a la periferia de “*exclusión social*” o “*desproletarización*”, ni pueden caracterizarse como luchas de una “*multitud*” amorfa y ecléctica sin pertenencia de clase: Abarcan a sectores cada más amplios de las clases explotadas, enganchan con el crecimiento de un movimiento de resistencia a la mundialización capitalista, se vinculan a las campañas, a las redes de solidaridad y las grandes confrontaciones contra las instituciones financieras internacionales, confirmando a la vez, la emergencia de un renovado internacionalismo (cuya expresión masiva se ha expresado desde Seattle al Foro Social Mundial de Porto Alegre).

Es en este movimiento antagonista, de lucha de clases, donde surge

una nueva izquierda social radical, que no solo reflexiona y escribe sobre *"el socialismo del futuro"* o *"el otro mundo posible"* sino que interviene en la lucha de clases, protagoniza rebeliones, disputa las relaciones de fuerza, ejerce diariamente la construcción de *"contrapoderes"* latentes.

El *"argentinazo"* ha acelerado esta recomposición del movimiento popular tanto como su radicalización. Representa un acontecimiento histórico decisivo en el curso de la lucha de clases en América Latina. Y si bien no se puede subestimar la capacidad de la burguesía y el imperialismo para organizar una salida contrarrevolucionaria, la fuerza del movimiento popular va sedimentando, lentamente, nuevas formas de democracia de base.

Hay una línea que conecta la lucha de masas en Argentina (y en América Latina de conjunto) con las revueltas de Seattle y Génova, con el movimiento contra la mundialización capitalista, tanto como con las insurrecciones, la desobediencia civil, las protestas y, sobre todo, con la formidable radicalización de una franja cada vez más amplia de la juventud a escala mundial.

Y, en el caso de América Latina, de las mujeres trabajadoras, desempleadas, jefas de hogar, las cuales juegan un rol esencial en la recomposición de una izquierda social radical.

El *"argentinazo"*, a su vez, ha fortalecido ese clima antiimperialista que es la principal amenaza al proyecto

recolonizador que Estados Unidos ha diseñado en torno al ALCA.

El *"argentinazo"* ha significado un salto en calidad en esta recuperación de los movimientos sociales, no solo como articuladores de la resistencia *"antineoliberal"*, sino en la perspectiva de construcción de un movimiento antiimperialista y anticapitalista. Del mismo modo que ha servido como factor clave para la deslegitimación del discurso y el programa neoliberal. Es la apertura de este proceso revolucionario lo que cuestiona, como nunca, el papel del FMI y los capitales transnacionales, la deuda externa, las privatizaciones y el entreguismo de las élites gobernantes.

El proceso revolucionario abierto, multiforme, de experiencia de democracia directa y descentralizada permite la interacción entre las diversas estructuras que surgen: piqueteros, asambleas barriales, grupos de pequeños ahorristas, trabajadores de servicios y de las fábricas. Esta confluencia reduce la división tradicional entre *"empleados"*, *"desempleados"* y *"clases medias"*.

Las experiencias del movimiento piquetero y las asambleas vecinales permiten la posibilidad de ir construyendo un movimiento revolucionario, un poder popular democrático y de perspectiva socialista. La *"gran revuelta"* ha puesto en la agenda la cuestión de una estrategia que vincule resistencia y lucha por el poder, la democracia representativa y/o el princi-

pio de revocabilidad, los "saqueos" como acto de autosubsistencia alimentaria. Inclusive experiencias de autogestión obrera, o sea, de cuestionamiento a la propiedad privada y al monopolio del proceso de producción.

En Argentina, un inmenso movimiento de masas, radical y democrático ha subvertido y dislocado todos los mecanismos de representación política e institucionales. Ha puesto en cuestión el monopolio del poder estatal capitalista y, potencialmente, expresa una posibilidad de avanzar hacia formas de doble poder. En tal sentido, la afirmación de León Trotsky asume plena vigencia: *"Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja"*.

Construir una izquierda anticapitalista

En América Latina y, en particular, en América del Sur, se vive una situación excepcional. Se combinan la intensidad de una crisis socioeconómica y del "modelo neoliberal" con una crisis institucional (de gobernabilidad) y de dirección política burguesa.

El proceso de contrarreformas ha perdido toda su legitimidad política e ideológica, y la amplia y radical naturaleza de las luchas populares colocan con más fuerza la necesidad de una refundación programática en un sentido antiimperialista y anticapitalista.

En este cuadro, tanto el frente

único y la unidad de la izquierda, como la construcción de una fuerza revolucionaria con implantación de masas y capacidad dirigente, son tareas fundamentales e inmediatas de la izquierda radical. Esas tareas no se pueden ni siquiera pensar en la soledad del sectarismo.

En tal sentido, la izquierda anticapitalista debe optar, sin vacilaciones, por una orientación política de reagrupamiento de la izquierda radical, de unidad de la izquierda revolucionaria.

La extrema polarización de lucha de clases agudiza tanto las relaciones como los debates en la izquierda latinoamericana en torno a las estrategias a seguir. Y, sobre todo, abre una brecha entre el binomio resistencia social y proyecto político alternativo.

La cuestión de articular resistencia social con propuesta política en una perspectiva estratégica de poder vuelve a colocarse con más fuerza y actualidad. La lectura unilateral de "reforma o revolución" hoy da paso a la urgencia de reforma y revolución para la "transformación del orden imperante", tal cual lo proponía Rosa Luxemburgo.

La distancia entre una izquierda radical cuya naturaleza de confrontación es indudable, y otra izquierda qué —sin dejar de tener una base social amplia y también de resistencia— se ubica en un horizonte estratégico de disputa institucional, se hace más evidente.

Al tiempo que la primera acentúa

sus rasgos “*resistentes*” y para-institucionales, la segunda se consolida en términos de gobiernos municipales, parlamentos y, en algunos casos, como opción electoral nacional. Mientras que retrocede en lo programático y se adapta (aún de manera conflictiva) a las reglas del sistema de dominación, polariza con la derecha sobre los “*modelos de país*”. Este curso se confirma en las principales organizaciones que componen el Foro de San Pablo.

En la izquierda que predomina en los grandes partidos y frentes, se impone una estrategia política de conciliación de clases, “*concertación*” y alianzas con sectores empresariales “*progresistas*” o directamente liberales. El “*progresismo*” se acerca cada vez más al socialliberalismo de la “*izquierda plural*”. Es el caso del PT, el Frente Amplio y el FSLN.

Atrapadas en el síndrome “*ni De la Rúa ni Chávez, pero tampoco Allende*”, las direcciones mayoritarias avanzan un programa de “*modelo alternativo de desarrollo*” con énfasis en “*lo social*”, en la “*erradicación de la pobreza*” para superar “*la pesada herencia neoliberal*”: endeudamiento, desnacionalización, desempleo, pobreza, estructura productiva dominada por los capitales transnacionales.

Sin embargo, en los programas no aparecen ni la moratoria de la deuda, ni la re-estatización de las empresas públicas privatizadas y los fondos privados de la seguridad social, ni una

reforma impositiva expropiatoria del capital, ni una ruptura con las condiciones que imponen los organismos financieros internacionales, ni políticas proteccionistas con cierta desconexión de la lógica “*globalizadora*”. Tampoco se inscriben ya en una estrategia de “*ruptura democrática*” o “*revolución democrática*”. Lo que prevalece en la visión de las direcciones mayoritarias es un reformismo sin “*reformas estructurales*”.

En la izquierda mayoritaria predomina una visión “*redistributiva*” sin medidas radicales de redistribución del ingreso y la riqueza.

Sin embargo, en América Latina la dimensión de la crisis y la prepotencia imperialista adquirieron tal magnitud, que los espacios para el “*progresismo*” se han evaporado. La desastrosa experiencia del gobierno de la Alianza en Argentina es el mayor ejemplo. Y cuando aparece un tímido proceso de nacionalismo y populismo social, como en Venezuela, la derecha, los sectores reaccionarios de la Iglesia, los militares y las multinacionales con el imperialismo detrás, organizan la desestabilización.

Esta operación contrarrevolucionaria —de la cual ya se habla si gana el Frente Amplio en Uruguay— se intensificará si el PT obtiene una victoria en Brasil. La derecha puede no contar con la fuerza para impedir un triunfo electoral de Lula, pero si para hacer fracasar su gobierno por la vía de la desestabilización y el sabotaje, o

por la de su completa desnaturalización. Por el momento, las multinacionales y los "inversores" hablan de que *"esperarán seis meses antes de tomar decisiones"* frente a un gobierno del PT. En este contexto, la evolución de la dirección del PT y de Lula ha dejado de ser *"contradictoria"*, y se consolida hacia el *"acuerdo social"* y un programa de *"madurez"* desarrollista sin ningún punto de ruptura con la lógica que imponen la mundialización capitalista y el imperialismo.

Re-pensar el programa

Una puesta al día programática de la izquierda latinoamericana no puede hacerse divorciada de las *"tareas concretas"* en un período de radicalización de la lucha de clases. Es decir, de la intervención en las luchas sociales por *"otro mundo posible"*...sin capitalismo; de vinculación con los sectores populares que se radicalizan, cuestionando de hecho la propiedad privada y construyendo alternativas a la *"democracia de mercado"*, de la batalla contra el posibilismo que impregna hoy a las direcciones mayoritarias de la izquierda, y del derrotismo y la pérdida de autoestima que impregna a fuerzas marxistas y revolucionarias.

Ese *"programa transicional"* pasa por cuestiones como el carácter que asume la recolonización económica y la cuestión de la soberanía nacional (an-

tiimperialismo concreto); la reformulación de los procesos de integración regional como alternativa al ALCA (propuestas de un real desarrollo); el no pago de la deuda; la lucha contra las privatizaciones; la cuestión de la democracia política, de re-apropiación de los derechos confiscados, tanto como el carácter, alcance y límites de una orientación de *"democracia participativa"* a nivel local o municipal (la izquierda latinoamericana gobierna ciudades capitales tanto como pequeños pueblos en Brasil, Uruguay, México, El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia); la relación entre luchas urbanas y rurales; la relación entre la resistencia social y la organización política; las nuevas formas que adquieren los *"sujetos"* que se reproducen al calor de la fragmentación de la clase obrera (piqueteros, asambleas populares, ocupantes de tierras y viviendas, experiencias de autodefensa, barrios que pelean por los servicios públicos, espacios juveniles, mujeres que organizan la autosubsistencia, las distintas experiencias de economía de trueque); las políticas de alianzas sociales y políticas (en el cuadro de una propuesta programática de frente único); las opciones de construcción de organizaciones de la izquierda revolucionaria.

Montevideo, septiembre de 2002